

**AMPARO EN REVISIÓN: 356/2024**  
**RECURRENTE Y QUEJOSA:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
**RECURRENTE ADHESIVO: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

**PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ**  
**SECRETARIO: NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO**  
**COLABORÓ: ALMA ROSA FRÍAS ENRÍQUEZ**

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de \*\*\*\* de \*\*\*\* de \*\*\*\*, emite la siguiente:

**SENTENCIA**

Correspondiente al amparo en revisión **356/2024**, interpuesto por [REDACTED]  
[REDACTED], a través de sus representantes [REDACTED]  
[REDACTED], contra la sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en apoyo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el juicio de amparo indirecto [REDACTED].

**I. ANTECEDENTES**

1. **Amparo indirecto** [REDACTED]. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintidós, [REDACTED] a través de sus representantes [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco “2”, adscrita a la Administración General de

Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria, por los actos siguientes:

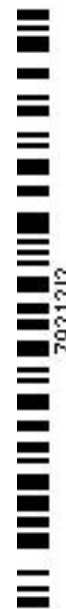
**“IV. AUTORIDADES RESPONSABLES**

*Tienen el carácter de autoridades responsables en el presente juicio de amparo, las siguientes:*

- a) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.*
- b) Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.*
- c) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.*
- d) La C. Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco “2”, adscrita a la Administración General de Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria.*

**V. ACTOS RECLAMADOS**

- 1. De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como órgano legislativo originario, se reclama la discusión, aprobación y expedición del “Decreto por el que se modifican diversas leyes fiscales y otros ordenamientos fiscales”, por medio del cual se adicionó el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998.  
En concreto, se reclama la discusión, aprobación y expedición el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, cuyo primer párrafo sigue vigente en 2022 y es del tenor literal siguiente:  
[...]*
- 2. De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se reclama la discusión, dictamen y aprobación, como órgano legislativo revisor, de la norma general que también se reclama a la Cámara de Diputados.*
- 3. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación de la norma general a la que se hace referencia en los numerales anteriores.  
Es de mencionarse que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, se reclama con motivo de su primer acto de aplicación en la esfera jurídica de la quejosa.*



**AMPARO EN REVISIÓN 356/2024**

*Dicho acto se materializó con la resolución administrativa contenida en el oficio [REDACTED] de fecha 27 de mayo de 2022, emitida por la C. Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco “2”, de la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria.*

*4. De la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Jalisco “2”, adscrita a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la emisión de la resolución administrativa contenida en el oficio [REDACTED] de fecha 27 de mayo de 2022, a través de la cual, se otorgó parcialmente a nuestra representada una condonación de multas y una reducción de tasa de recargos, respecto de los adeudos fiscales determinados mediante oficio [REDACTED] de 9 de octubre de 2015, por concepto de impuesto sobre la renta retenido, impuesto al valor agregado retenido, actualización, recargos y multas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. Cabe mencionar que, a través del presente juicio de amparo, únicamente, se combate aquella parte de la resolución administrativa contenida en el oficio [REDACTED] [REDACTED] que no resulta favorable a los intereses de nuestra representada, esto es:*

- El hecho de que la autoridad responsable no haya aplicado la reducción de recargos, al impuesto al valor agregado propio, ni a los recargos denominados por aquella como “recargos por financiamiento”, correspondientes a los recargos determinados por omisiones en los pagos provisionales de impuesto empresarial a tasa única.*
- El hecho de que la autoridad responsable no haya aplicado la reducción de multas, correspondientes al impuesto al valor agregado propio.”*

*2. En su primer concepto de violación, la parte quejosa cuestionó la validez del oficio [REDACTED], de veintisiete de mayo de dos mil veintidós; y, en su segundo concepto de violación se inconformó de la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal*

## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

de la Federación; ambos por contravenir los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la constitución.

3. Por cuestión de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el que, por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, admitió a trámite, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
4. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito del conocimiento, ordenó remitir los autos al **Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa**, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/556/2021 de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que dictara la sentencia correspondiente.
5. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, el **Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa**, tuvo por recibidos los autos del juicio de amparo [REDACTED], el cual fue registrado como expediente auxiliar [REDACTED] y el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se dictó **sentencia** en la que determinó lo siguiente:

***“ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED] [REDACTED] contra los actos y las autoridades precisados en el***

*segundo considerando, por los motivos expuestos en el séptimo y octavo considerandos de esta sentencia.”*

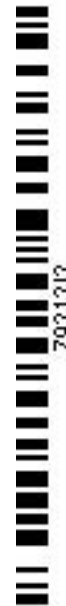
6. **Recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado** [REDACTED]. Inconforme con la sentencia de amparo [REDACTED] a través de su autorizado [REDACTED] interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito**, y por acuerdo de Presidencia de tres de abril de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y quedó registrado con el número [REDACTED].
7. **Recursos de revisión adhesiva.** Por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la revisión adhesiva del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Posteriormente, el citado Tribunal Colegiado de Circuito, en sesión de veintitrés de abril del dos mil veinticuatro, determinó:

***“PRIMERO.** Este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito **deja a salvo la jurisdicción** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de este recurso de revisión principal y adhesivo.*

***SEGUNDO. Remítanse los autos al Alto Tribunal y habilítase el acceso al expediente digital.”***

9. En el cuerpo de la ejecutoria de referencia, entre otras cuestiones, se precisó lo siguiente:

*“Como se ve, la parte quejosa interpuso este recurso de revisión, en el que expresa diversos argumentos para tratar de demostrar que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación contraviene los principios de igualdad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

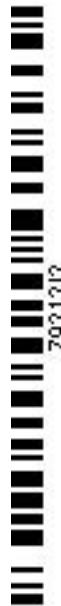


*Asimismo, se considera que el problema de constitucionalidad materia de este asunto muestra matices relevantes, que entrañarían la fijación de un criterio jurídico para casos futuros, en razón de que la problemática jurídica suscitada pudiera ampliar los supuestos del otorgamiento de los beneficios establecidos en dicho precepto, por lo que podría establecerse un criterio relevante para el sistema jurídico mexicano, esto es, se estima que el asunto reviste razones relevantes al tratarse de una norma federal que la quejosa considera inconstitucional relacionado con la exclusión de los impuestos trasladados para obtener el beneficio fiscal que en el precepto reclamado se contempla **y porque no se localizó algún precedente aplicable que solucione el problema de constitucionalidad planteado. Por lo mismo, su estudio permitiría establecer un criterio que sirva para la resolución de casos futuros en los que se debata el tema señalado.***

*Así pues, este Órgano Colegiado considera que lo procedente es **dejar a salvo la jurisdicción** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver este asunto y remitirle los autos, sin analizar los conceptos de violación expuestos, aun los de mera legalidad.*

*En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto **Décimo** del Acuerdo Plenario 1/2023 del Pleno del Máximo Tribunal y su instrumento normativo vigente, **se deja a salvo la jurisdicción** de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer y resolver el presente recurso de revisión principal y adhesivo.”*

10. Amparo en revisión ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (**356/2024**) El seis de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión principal y adhesivo, ordenó su



radicación en la Primera Sala y lo turnó para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.<sup>1</sup>

11. Mediante acuerdo de seis de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala, dispuso que la misma se avocara al conocimiento del asunto, y ordenó enviarse los autos a la Ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente y se diera cuenta de él a esta Primera Sala.

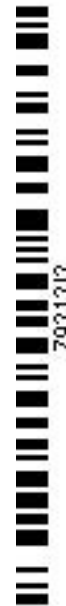
II. PRESUPUESTOS PROCESALES

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente amparo en revisión.<sup>2</sup>
13. **Oportunidad y legitimación.** No es necesario analizar la oportunidad tanto del recurso de revisión de la quejosa, como del

<sup>1</sup> Tal como se advierte del acuerdo de Presidencia de seis de mayo de dos mil veinticuatro.

<sup>2</sup> Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; vigente tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como lo previsto en el Acuerdo General Plenario 1/2023, punto tercero en relación con el segundo, fracción III, inciso A) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, por tratarse de un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en amparo indirecto, donde subsiste un tema de constitucionalidad respecto del cual se tiene la competencia originaria.

Se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento, dispone que -al igual que los amparos directos en revisión- los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas.



AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

recurso de revisión adhesiva de la autoridad responsable, pues el Tribunal Colegiado ya lo examinó y determinó que fueron interpuestos oportunamente.<sup>3</sup>

14. El recurso de revisión principal y el adhesivo fueron promovidos por partes legitimadas.<sup>4</sup>

15. **Procedencia de los recursos de revisión.** Los recursos de revisión principal y adhesivo interpuestos por la parte quejosa y el Presidente de la República respectivamente, son procedentes en virtud de que se interpusieron en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se combatió la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, al atentar contra los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la constitución. Por ende, se surten los extremos de los puntos segundo, fracción III, inciso A), y Tercero, del Acuerdo General Plenario 1/2023.

16. **Causas de improcedencia.** En cuanto al análisis de las causas de improcedencia se estima innecesario pronunciarse en relación con estas, debido a que el Juez de Distrito analizó las causales hechas valer por las responsables y fueron desestimadas; y, en su

<sup>3</sup> Lo que se advierte de la ejecutoria de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, dictada en el recurso de revisión [REDACTED] por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

<sup>4</sup> El recurso de revisión en lo principal fue interpuesto por [REDACTED] autorizado de en términos amplios por la empresa quejosa [REDACTED] personalidad reconocida por el Juez de Distrito del conocimiento, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo [REDACTED] de su índice.

El recurso de revisión adhesiva fue interpuesto por el Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto se encuentra legitimada para la interposición del presente recurso.



oportunidad, el Tribunal Colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna; por lo que esta Primera Sala no advierte otra que se tenga que analizar de oficio.

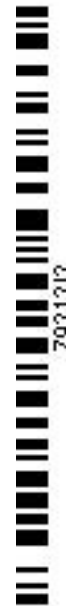
III. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

17. A fin de estar en aptitud para resolver el presente amparo en revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos del recurso de revisión principal y adhesivo, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado.
18. **Demanda de amparo.** Al solicitarse el amparo contra la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación y de la resolución administrativa contenida en el oficio [REDACTED] [REDACTED] de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, donde se otorgó una condonación parcial de multas y una reducción de tasa de recargos respecto de adeudos fiscales, la empresa quejosa pronunció los siguientes conceptos de violación:
19. En el **primer** concepto de violación, hizo valer que la resolución administrativa contenida en el oficio [REDACTED], de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, es violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en el artículo 16 constitucional.
20. Esto, pues señaló que en virtud de que la autoridad fiscal fue omisa en aplicar los beneficios de reducción de montos previstos en el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, respecto de los



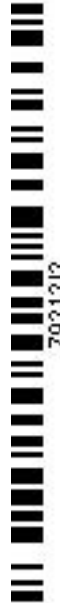
recargos correspondientes a los pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como recargos y multas del Impuesto al Valor Agregado, aun cuando se reconoce que la empresa quejosa cumple con los requisitos exigidos.

21. Afirmó que no se justificaron los motivos de la decisión, no obstante que de la regla 2.14.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 permite la aplicación de los beneficios contenidos en el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, a aquellos contribuyentes que les hayan sido determinadas contribuciones: (i) retenidas, (ii) recaudadas o (iii) trasladadas; siempre y cuando pague la totalidad de los impuestos y accesorios remanentes que le hayan sido determinados y no fueran sujetos de los beneficios del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.
22. Sobre la en la resolución [REDACTED] de nueve de octubre de dos mil quince, sostuvo que la autoridad fiscal le determinó a la quejosa un crédito fiscal por la cantidad de [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] por concepto de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto al Valor Agregado, más un reparto adicional de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, correspondientes al ejercicio fiscal de 2011.
23. Por cuanto se refiere al Impuesto Empresarial a Tasa Única, se determinó la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] y una actualización por pagos provisionales de [REDACTED] [REDACTED]

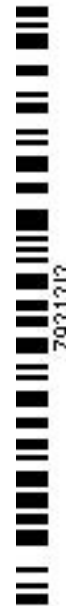


correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre y noviembre de 2011, respecto de lo que se determinaron recargos por

24. Sin embargo, hizo referencia que, con relación al Impuesto Empresarial a Tasa Única, la autoridad responsable no aplicó la tasa de recargos por prórroga por concepto de pagos provisionales, pese a que sí la hizo en la determinación de recargos por tasa única anual, además de no haber justificado esa decisión y que la normativa no prevé alguna limitante al respecto.
25. Manifestó que el beneficio de referencia está reconocido para el Impuesto Empresarial a Tasa Única, tanto en tasa única como anual, pues en ambos casos la naturaleza del tributo es la misma, corresponde a impuestos propios cuyos pagos provisionales corren por cuenta del impuesto anual.
26. Por cuanto se refiere al Impuesto al Valor Agregado, afirmó que la resolución era contraria al principio de legalidad, porque sin sustentar su decisión la autoridad excluyó del beneficio a los recargos y multas correspondientes al impuesto al valor agregado propio, aun cuando resultaba procedente en términos del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.
27. Refirió que la autoridad fiscal se limitó a señalar que el beneficio de la reducción del 100% de las multas aplicaba solo respecto de impuestos por el pago de contribuciones propias y el tributo en comento es propio.



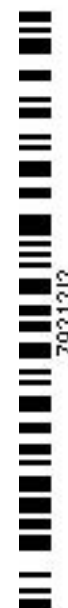
28. En cuanto se refiere a los recargos por prórroga, hizo valer que no se incluyeron los relativos al Impuesto al Valor Agregado, sin motivos ni fundamentos, aun cuando la regla 2.14.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, en su tercer párrafo, establece que los contribuyentes que tengan determinadas contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas junto con los impuestos propios (como sucede en el caso) podrán solicitar los beneficios del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.
29. En el **segundo** concepto de violación, hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, porque a su decir, contravenía los principios de igualdad y seguridad jurídica previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la constitución.
30. Cuestionó que el precepto en comento excluye del beneficio de reducción de montos a las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas como sí se tratara de figuras análogas, cuando lo cierto es que no son equiparables entre ellas, contraviniendo el principio de igualdad.
31. Para demostrar su afirmación, señaló que las figuras de retención, recaudación y traslado no son figuras análogas, porque las primeras dos (retención y recaudación) corresponden a contribuciones de terceros, mientras que el “*traslado*” corresponde a impuestos propios.
32. Dijo que en la figura de la retención se trata de una imposición de las autoridades tributarias sobre el contribuyente para substraer parte de sus ingresos como forma de cobro anticipado de uno o varios



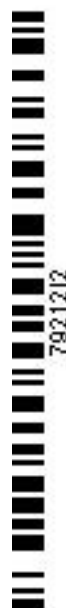
## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

impuestos; además que se actualiza la obligación de calcular y retener el impuesto y posteriormente enterarlo a las autoridades fiscales, mientras que en la recaudación se colecta el ingreso de un tercero para que, en un momento posterior, éste sea enterado al Fisco por su recolector.

33. En el caso de impuestos trasladados, señaló que el sujeto pasivo realiza los actos gravados por la ley y está obligado a enterar el impuesto causado ante las autoridades fiscales, previa mecánica de determinación y cálculo, independientemente de que hubiera sido trasladado a un tercero.
34. Es decir, afirmó que se trata de un impuesto en el que la carga económica incide directamente en otro sujeto, a pesar de haber sido causado por otro; sin embargo, a pesar de que la carga incida en otro derivado del traslado, dijo que éste resultaba un impuesto propio del causante y no de un tercero, como sucede en el Impuesto al Valor Agregado, donde el tributo es trasladado dentro de la cadena productiva o de comercialización.
35. De ahí que sostuvo que si el Impuesto al Valor Agregado, grava el importe que se añade en cada etapa de comercialización de los bienes y servicios, es a través de la figura del acreditamiento que se conoce el impuesto del contribuyente y el que se traslada, cuya diferencial corresponde al pago propio.
36. Al identificarse que los impuestos trasladados sí son propios, concluyó que no existía justificación alguna que sustentara el trato equiparable de exclusión con los impuestos retenidos y recaudados que, a diferencia de los trasladados, sí correspondían a terceros.

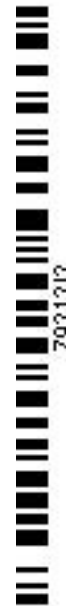


37. Por todo lo anterior, señaló que al no ser equiparables las figuras de retención, recaudación y traslado como objeto de exclusión para los beneficios del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, es que consideraba que era violatorio del principio de igualdad jurídica previsto en el artículo 1º constitucional.
38. Lo anterior, porque dijo que de manera injustificada se excluía de los beneficios del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, a los impuestos propios trasladados con los no trasladados, pues se trataban de situaciones análogas, en el sentido de que tanto los impuestos trasladados como los no trasladados resultaban propios.
39. Así, afirmó que al ser situaciones análogas, la aplicación y procedencia del beneficio necesariamente debía ser la misma, pues de conformidad con el principio de igualdad, las autoridades tienen la obligación de otorgar el mismo tratamiento a supuestos de hecho equivalente, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita un trato desigual, situación que no aconteció.
40. En esa línea de ideas, reiteró que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, es contrario al principio de igualdad y seguridad jurídica, en virtud de que, de manera injustificada no otorga el mismo tratamiento a los impuestos indirectos como sí lo hace a los impuestos directos.
41. Además, señaló que dicha irregularidad se trató de subsanar con la regla 2.14.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, dado que en su párrafo tercero se establece que los contribuyentes que tengan determinadas contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas



junto con los impuestos propios, podrán solicitar los beneficios del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, aun cuando dicha miscelánea no podía corregir la inconstitucionalidad denotada.

42. **Consideraciones del Juez de Distrito.** Para el análisis de los conceptos de violación hechos valer, el Juzgador de Distrito efectuó el estudio en dos considerandos; en el considerando **Séptimo**, abordó el tema de la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, y en el considerando Octavo, analizó el concepto de violación relativo a la legalidad de la resolución administrativa contenida en el oficio [REDACTED] de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, esto, bajo las consideraciones siguientes:
43. En el **considerando séptimo** se determinó **infundado** el concepto de violación en materia de constitucionalidad.
44. Para ello se precisó que con lo previsto en el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, se permite a la autoridad fiscal reducir el monto de multas por infracción a las disposiciones fiscales hasta en un cien por ciento y podrán aplicar la tasa de recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, por el plazo que corresponda cuando lo haya solicitado el infractor, para lo cual deberá cumplirse con lo siguiente:
- i) Presentar avisos, declaraciones y demás información, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales.
  - ii) Que no se hubieran determinado diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al diez por ciento, respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado



## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

pérdidas fiscales mayores en un diez por ciento a las realmente sufridas, en caso de que las autoridades hayan ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales.

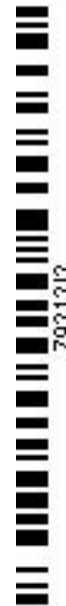
- iii) Haber cumplido los requerimientos que le hayan hecho las autoridades fiscales en los tres últimos ejercicios fiscales.
- iv) No haber incurrido en las agravantes a que se refiere el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa.
- v) Que no esté sujeto de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales.
- vi) Que no haya solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.

**45.** El juzgador también apuntó que la autoridad fiscal, para verificar que se reúnan estos requisitos, puede requerir al infractor, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la fecha en que hubiera presentado la solicitud, los datos, informes o documentos que considere necesarios.

**46.** También se explicó en la sentencia, que debía requerirse al infractor a fin de que en un plazo máximo de quince días cumpliera con lo solicitado por las autoridades fiscales, apercibido que, de no hacerlo, no sería procedente el beneficio de reducción, aclarando que se consideraría que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando solicitaran los datos, informes y documentos pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

**AMPARO EN REVISIÓN 356/2024**

- 47.** Se abundó que una vez cerciorado que el infractor cumpliera con los requisitos reduciría el monto de las multas por infracción a las disposiciones fiscales en cien por ciento y aplicarían la tasa de recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, por el plazo que correspondiera y que dicha reducción se condicionaría a que el adeudo fuera pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes de aquél en que se le hubiera notificado la resolución respectiva.
- 48.** Preciso el Juez de Distrito, que se condicionaba la procedencia de la reducción, también a que se tratara de multas firmes o que fueran consentidas por el infractor y siempre que un acto administrativo conexo no fuera materia de impugnación, así como respecto de multas determinadas por el propio contribuyente.
- 49.** Se concluyó la explicación, refiriendo que el precepto en comento dispone que lo previsto en él no constituye instancia y las resoluciones que se emitieran por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.
- 50.** En palabras del juzgador, se evidenció que la legislatura facultó al Servicio de Administración Tributaria, para reducir el monto de las multas firmes que se hubieran impuesto, por lo que los particulares podían solicitar esa reducción, cuyas peticiones no constituirían instancia, así como que no son impugnables las resoluciones emitidas por la autoridad.
- 51.** Se tuvo en cuenta que la institución jurídica tributaria de la reducción o condonación debía entenderse como una forma de extinción de la

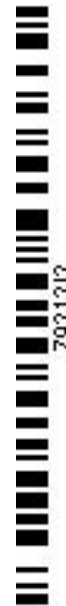


obligación fiscal, mediante la cual se perdonaba, total o parcialmente a los contribuyentes, el pago de sus cargas fiscales.

52. Por ello, se afirmó, que se configuraban como una medida por la cual el legislador, con carácter excepcional y discrecional, exonera el pago de aquellas cargas que ya son exigibles, incluso, el carácter de beneficio para el deudor, que a propósito no puede exigirse coactivamente.
53. Al respecto citó dos tesis de rubros: **“CONDONACION DE MULTAS FISCALES. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE”<sup>5</sup>** y **“CONDONACION DE MULTAS FISCALES, NATURALEZA DE LA”<sup>6</sup>**.
54. De ahí que, se dijo, que si la reducción o condonación fiscal, una vez configurada por el legislador constituía un beneficio, derecho o disfrute al cual puede acceder el deudor, porque con base en ella se perdonan adeudos pecuniarios líquidos, **la solicitud de condonación revela el reconocimiento del gobernado de una obligación cierta de pago de un adeudo fiscal.**
55. Así se concluyó que, como la mencionada reducción tiene como finalidad liberar al particular de la obligación de pago de una multa, derivada del crédito fiscal determinado a su cargo, aun siendo adversa a sus intereses no le está privando de derecho alguno.

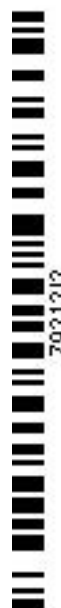
<sup>5</sup> Tesis Aislada; Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación; Materia Administrativa; Semanario Judicial de la Federación; Sexta Época; Volumen XLIX; Tercera Parte; página 32; Registro digital 801845.

<sup>6</sup> Tesis Aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVI; Quinta Época; Materia Administrativa; página 706; Registro digital 328624.



## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

56. Se dijo que distinto es, cuando se retuvo y no se enteró el tributo, lo que incluso constituía una agravante al imponerse la multa, como lo dispone el artículo 75, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, pues en esta hipótesis, el sujeto no erogará numerario alguno de su patrimonio, sino que, al pagar la determinación por retención, se entiende es con el dinero que cobró o descontó en su momento del sujeto obligado; lo que explica por qué no procedía gozar del beneficio señalado en el artículo 70-A del ordenamiento invocado.
57. Se insiste en la sentencia, que los beneficios fiscales analizados tienden a incentivar el buen historial tributario de los contribuyentes (disminuyendo sanciones), para buscar una mejor equidad en el sistema fiscalizador y, que contribuyeran en mayor medida las personas con capacidad contributiva elevada; lo que se observa del proceso legislativo de la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
58. Así, se narra, el legislador negó cualquier posibilidad de que los beneficios fiscales pudieran aplicarse en contribuciones **que provengan del patrimonio de terceros**, pues el contribuyente que incurra en la omisión **habrá faltado a su obligación de retener, recaudar o trasladar el tributo correspondiente, lo cual implica que lo conserve, injustificadamente.**
59. El juzgador determinó que, para efectos de abonar al estudio, era pertinente un estudio del caso en términos de los **artículos 14 y 16 de la constitución**, cuyas prerrogativas no se transgreden, porque el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, no permite un **acto**



7921212

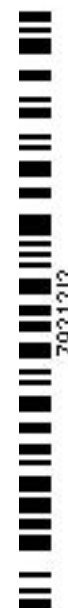
## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

de privación ni de molestia respecto de bienes o derechos de contribuyente.

60. Por el contrario, dijo que la norma cuestionada faculta a la autoridad a verificar ciertos requisitos para autorizar la reducción de la multa, pero que el contribuyente pretendía derivar sus derechos fundamentales a una nueva oportunidad para no pagar dicho crédito; pero que no debía olvidarse que previamente había sido determinado un crédito fiscal y respecto de esa determinación se tuvo la oportunidad de ejercer una defensa, por ello la reducción de las multas no constituía un derecho sino un régimen de beneficio. Para sostener lo anterior, citó la tesis de rubro: ***“CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA.”***<sup>7</sup>
61. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación, el Juzgador Federal declaró que lo procedente era **negar** el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, respecto del artículo **70-A del Código Fiscal de la Federación**.
62. En el **considerando octavo** el primer concepto de violación (en materia de legalidad) se determinó **infundado y fundado pero inoperante**.

<sup>7</sup> Tesis aislada 1a. LV/2010; Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época; Materias Constitucional y Administrativa; Tomo XXXI; Marzo de 2010; página 921; Registro digital: 165084z.

63. Para concluir lo anterior, después de explicar nuevamente el contenido del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, abundó sobre la regla 2.14.3. de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2022, donde se **dispone la forma y medios en que podrá solicitarse la reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórroga**. Se destacó que los contribuyentes que tuvieran determinadas contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas junto con los **impuestos propios**, podrían solicitar los beneficios establecidos en el mencionado numeral, siempre y cuando el infractor pagara además de los impuestos propios, la totalidad de las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas y accesorios por el ejercicio o periodo revisado.
64. Por ello, dijo que la regla 2.14.3 no puede interpretarse de manera aislada, sino dentro del contexto en el que se encuentra, por lo que la reducción de multas y aplicación de tasa de recargos por prórrogas únicamente procedía respecto de determinaciones de contribuciones propias, sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, pues, aun cuando la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 reconoce que se puede gozar de ese beneficio en determinaciones de impuestos retenidos, ello está condicionado a que éstos **no se hayan cobrado o descontado al contribuyente obligado**, porque quien no retuvo debe enterar al fisco el importe con su propio peculio.
65. Se insistió en que ello se justifica en la medida en que los beneficios fiscales analizados tienden a incentivar el buen historial tributario de los contribuyentes, buscando una mejor equidad en el sistema fiscalizador; así como, que contribuyan, en mayor medida, las



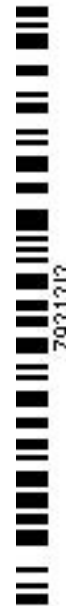
## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

personas con capacidad contributiva elevada; de ahí lo **infundado** del concepto de violación.

66. Finalmente, se determinó **fundado pero inoperante** el agravio sobre que la responsable omitió argumentar por qué no otorgó el beneficio respecto del impuesto al valor agregado.
67. Fundado, se dijo, porque al emitirse el oficio controvertido, la autoridad fiscal no realizó argumento alguno sobre ese punto. Sin embargo, resultó inoperante porque aun cuando se hubiera analizado, se llegaría a la misma conclusión, esto es, a la improcedencia del beneficio solicitado.
68. Ello es así, porque la autoridad fiscal resolvió que la quejosa había retenido el impuesto al valor agregado y no lo enteró; lo que contrariamente al beneficio que se reclamó, constituyó una agravante en la determinación de la multa correspondiente en términos de la fracción III del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación. Decisión que no variaría el sentido en caso de estudio, dado lo improcedente de la petición. En consecuencia, se resolvió **negar** el amparo.
69. **Agravios de la quejosa en vía de revisión.** Con relación a lo resuelto por el Juzgador de Distrito, la empresa quejosa y recurrente refirió lo siguiente:
70. En el **primer agravio**, se señaló que la sentencia recurrida resultaba contraria a los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, por no haberse resuelto todas las cuestiones efectivamente planteadas en la demanda e interpretar incorrectamente lo expuesto por la quejosa

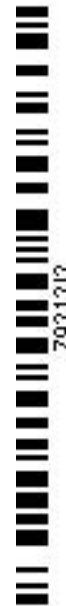
respecto de la violación del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, al principio de seguridad jurídica.

- 71. Lo anterior, porque la recurrente parte de la idea de que se omitió realizar pronunciamiento sobre la sostenida violación al principio de igualdad argumentada en su demanda.
- 72. Que se sostuvo que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, es contrario al artículo 1º constitucional, porque el beneficio que prevé no se otorga sobre contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas como si dichas figuras fueran análogas, cuando lo cierto es que no son equiparables al consistir en situaciones jurídicas distintas, lo que trasgrede el principio de igualdad.
- 73. Se cuestionó que las referidas figuras son distintas debido a que las dos primeras corresponden a contribuciones de terceros, mientras que el traslado corresponde a impuestos propios.
- 74. Se dice que, como el *A quo* no se pronuncia sobre lo efectivamente planteado respecto de la diferencia que existe entre las figuras de retención, recaudación y traslado que origina la violación alegada, no se resolvió lo relativo al principio de igualdad alegado.
- 75. En relación con el principio de seguridad jurídica, se precisó que el normativo en cita deviene inconstitucional porque excluye los beneficios que otorga, a los impuestos trasladados, esto sin mayor justificación y sin otorgar la posibilidad de conocer los motivos de la exclusión.



AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

76. Que la sentencia recurrida no resuelve lo planteado, porque se analiza el principio de seguridad jurídica en la vertiente de las formalidades que deben guardar los actos de privación o de molestia, pero lo controvertido recae en la incertidumbre que genera la exclusión del beneficio contenido en el artículo reclamado, además de hacerse hincapié en sostener que la autoridad no podía causarle una afectación con lo decidido. Aunado a lo anterior, sostuvo que la sentencia recurrida no tiene congruencia con lo planteado.
77. En el **segundo agravio**, expuso los argumentos en materia de legalidad, siguientes:
78. Que se transgreden los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, por no haberse resuelto las cuestiones efectivamente planteadas al interpretarse incorrectamente la regla 2.14.3. de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2022.
79. Entre otros agravios, el recurrente se duele de la omisión del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el argumento de la inaplicación de beneficios a los pagos provisionales del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
80. También se queja del análisis de recargos y multas, contenido en la resolución [REDACTED], en relación con el Impuesto al Valor Agregado propio, y la omisión de la autoridad fiscal de pronunciarse de diversos argumentos sobre el mismo punto.
81. Finalmente, se queja de la interpretación que el juzgador dio a la regla 2.14.3. de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2022, porque en su opinión, dicho ordenamiento sí permite acceder a los beneficios



del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, a aquellos obligados que tengan determinadas contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas y no limita su aplicación.

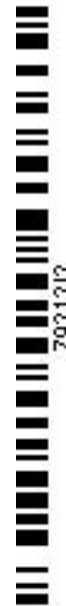
- 82. Recurso de revisión adhesivo.** El Presidente de la República, a través de su representante, realizó diversas consideraciones para fortalecer la negativa del amparo, donde expuso:
- 83.** Que la norma cuestionada faculta a la autoridad a verificar los requisitos para autorizar la reducción de la multa, pero la contribuyente pretende derivar sus derechos fundamentales de una nueva oportunidad para no pagar el crédito.
- 84.** Que el crédito fiscal fue determinado con anticipación, sobre el cual se tuvo la oportunidad y se ejerció defensa. Que el numeral combatido permita acceder a una reducción de multas, no constituye un derecho sino un régimen de beneficio, el cual impone requisitos para que las autoridades puedan hacerlo efectivo.
- 85.** Afirma que en ningún modo se afecta un derecho o lo introduce en el patrimonio de la contribuyente y, por otra parte, que los agravios de la quejosa son inoperantes por ser una reiteración de los conceptos de violación.
- 86.** También pretende que se califiquen de inoperantes los agravios relacionados con omisiones de estudio, en virtud de que no se establece el un motivo de valor del por qué, ni señalando el agravio que esa supuesta falta de estudio generó en su esfera jurídica y solos se reiteran los conceptos de violación.



87. Por último, se refiere que es inatendible la suplencia de la queja por no existir jurisprudencia aplicable al caso.
88. **Sentencia del Tribunal Colegiado** [REDACTED]. En sesión de veintitrés de abril de dos mil veinticuatro, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dictó resolución en la que, previo análisis, reservó jurisdicción a este Alto Tribunal al estimar que no se actualizaron los supuestos de competencia delegada para dicho órgano colegiado sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.

IV. ESTUDIO DE FONDO

89. **Problemática jurídica para resolver.** La materia del presente asunto consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, a la luz de los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la constitución. Esta problemática será analizada, por cuestión metodológica en función de la siguiente pregunta:
- ¿Los argumentos planteados por la revisionista son aptos para controvertir lo resuelto por el Juez de Distrito relativos a la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación?**
90. La respuesta a esta interrogante es en **sentido negativo**, por las razones que en seguida se expondrán.
91. Cabe recordar que, en el **concepto de violación segundo**, la quejosa argumentó la inconstitucionalidad del 70-A del Código Fiscal



## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

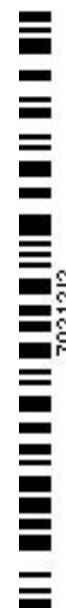
de la Federación, por contravenir, de manera conjunta, los principios de igualdad y seguridad jurídica previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la constitución, afirmando esencialmente lo siguiente:

- Que el precepto combatido excluye del beneficio a las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, como sí se tratara de figuras análogas, cuando no lo son, porque las primeras dos corresponden a contribuciones de terceros, mientras que la última se refiere a impuestos propios, por lo que afirmó que se contraviene el principio de igualdad.
- Dijo que, si bien la carga económica del Impuesto al Valor Agregado incide en otro sujeto, también resultaba un tributo propio del causante, al ser trasladado dentro de la cadena productiva o de comercialización, lo cual era posible conocer a través del acreditamiento, que permite seccionar entre lo erogado por el contribuyente y lo que se traslada.
- Que, identificado el monto propio del impuesto, no puede sustentarse el trato equiparable de exclusión con los impuestos retenidos y recaudados que sí corresponden a terceros; de ahí lo violatorio de los principios de igualdad y de seguridad jurídica y que no podía ser corregido con la regla 2.14.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

- 92.** En contraposición, en la parte relativa al tema de constitucionalidad de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito explicó ampliamente el contenido del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación:

## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

- Precisó que, con lo previsto en dicho precepto, se permite a la autoridad fiscal reducir el monto de multas por infracción, hasta en un cien por ciento y podrán aplicar la tasa de recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, siempre que se cumplan con los requisitos que ahí se prevén.
- Que para verificar que se reúnan los requisitos, la autoridad puede requerir al infractor, en un plazo no mayor de veinte días, los datos, informes o documentos que considere necesarios.
- Que debe requerirse al infractor para que en un plazo máximo de quince días cumpla con lo solicitado por las autoridades fiscales, apercibido que, de no hacerlo, no será procedente el beneficio. Acotando que ello, no se considerará el inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando se soliciten los datos, informes y documentos, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
- Precisó que, una vez cerciorados los requisitos, se reduciría el monto de las multas y aplicaría la tasa de recargos por prórroga; tal reducción se condicionará a que el adeudo sea pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes de la notificación.
- El Juez de Distrito, determinó que la procedencia de la reducción también se condiciona a que se trate de multas firmes o que sean consentidas por el infractor, que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación y respecto de multas determinadas por el propio contribuyente.



## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

- Dijo que el precepto dispone que lo previsto no constituye instancia y las resoluciones de la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares. Ello pues la legislatura facultó al Servicio de Administración Tributaria, para reducir el monto de las multas firmes.
- Consideró que la reducción o condonación debía entenderse como una forma de extinción de la obligación fiscal, mediante la cual se condona, total o parcialmente a los contribuyentes, el pago de sus cargas fiscales.
- Por ello, apreció que se configura como una medida por la cual el legislador, con carácter excepcional y discrecional, exonera el pago de aquellas cargas que ya son exigibles, incluso, el carácter de beneficio para el deudor, que a propósito no puede exigirse coactivamente.
- Para sustentar lo anterior, citó las tesis: **“CONDONACION DE MULTAS FISCALES. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE”<sup>8</sup>** y **“CONDONACION DE MULTAS FISCALES, NATURALEZA DE LA”<sup>9</sup>**.
- Agregó que, si la reducción o condonación fiscal configurada por el legislador constituye un beneficio, derecho o disfrute al cual puede acceder el deudor, porque con base en ella se perdonan adeudos

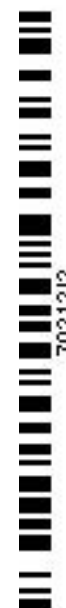
<sup>8</sup> Tesis Aislada; Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación; Materia Administrativa; Semanario Judicial de la Federación; Sexta Época; Volumen XLIX; Tercera Parte; página 32; Registro digital 801845.

<sup>9</sup> Tesis Aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVI; Quinta Época; Materia Administrativa; página 706; Registro digital 328624.

## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

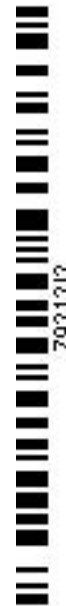
pecuniarios líquidos, la solicitud de condonación revela el reconocimiento de una obligación cierta de pago.

- Afirmó que la reducción, libera de la obligación de pago de una multa derivada del crédito fiscal, aun adversa, no priva de derechos; para lo cual señaló que es distinto cuando se retiene y no se entera el tributo, pues constituye una agravante al imponerse la multa (artículo 75, fracción III, del Código Fiscal de la Federación).
- Refirió que la determinación por retención se paga con el dinero cobrado al sujeto obligado, por ello no procedía el beneficio señalado en el artículo 70-A del ordenamiento invocado.
- Hizo énfasis en los beneficios fiscales analizados, tienden a incentivar el buen historial tributario de los contribuyentes, para buscar una mejor equidad en el sistema fiscalizador y, contribuyan en mayor medida las personas con capacidad contributiva elevada. Conclusión que se desprendió del análisis del proceso legislativo de la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
- Sobre ello destacó que el legislador negó cualquier posibilidad de que los beneficios fiscales pudieran aplicarse en contribuciones **que provengan del patrimonio de terceros** y que el contribuyente que incurriera en la omisión **habría faltado a su obligación de retener, recaudar o trasladar el tributo correspondiente, lo cual implicaba que lo conservara injustificadamente.**



7921212

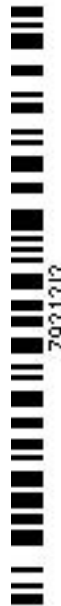
93. Al combatir las anteriores consideraciones, en el **primer agravio** de su recurso la revisionista sustancialmente afirma que no fueron resueltas todas las cuestiones planteadas.
94. Para demostrar ello afirma que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, es contrario al artículo 1º constitucional (igualdad), porque el beneficio que prevé no se otorga sobre contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, aun cuando entre ellas no son equiparables.
95. Continúa afirmando que en la sentencia no existió pronunciamiento sobre que las figuras de retención y recaudación corresponden a contribuciones de terceros, pero el traslado corresponde a impuestos propios y que sin mayor justificación y sin posibilidad de conocer los motivos (seguridad jurídica), se excluye de los beneficios a los impuestos trasladados.
96. Por lo que reitera que no se resolvió lo plateado porque el principio de seguridad jurídica se analiza bajo las formalidades que deben guardar los actos de privación o de molestia y que no podía causársele una afectación, cuando lo controvertido recae en la incertidumbre que genera la exclusión del beneficio.
97. En análisis a lo anterior, esta Primera Sala advierte que resulta **inoperante** el **agravio primero** que se estudia debido a que la quejosa parte de una premisa equivocada, pues distinto a lo que afirma, el Juez de Distrito, con independencia de lo acertado o no de su decisión, sí atendió en suficiencia tanto lo argumentado en relación con el principio de igualdad relativo a la seguridad jurídica.



**98.** Para esto, no debe soslayarse que si bien en el segundo concepto de violación de la demanda, la quejosa desarrolló dos apartados en materia de constitucionalidad, uno relativo al principio de igualdad y otro al de seguridad jurídica, lo cierto es que los puntos medulares de ambos fue el mismo, a saber:

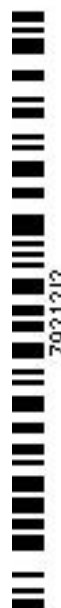
- Que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, excluye del beneficio a las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, como si fueran figuras análogas.
- Que no son similares, porque las contribuciones retenidas y las recaudadas corresponden a terceros, mientras que las trasladadas se refieren a impuestos propios.
- Afirmó que, si bien el Impuesto al Valor Agregado incide en otros sujetos, también es del causante al ser trasladado dentro de la cadena productiva, por ello, mediante el acreditamiento era posible conocer lo erogado por el contribuyente y lo trasladado.
- Dijo que el monto propio no puede equipararse con la exclusión del beneficio de los impuestos retenidos y recaudados y afirmó que la regla 2.14.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, no puede enmendar dicha irregularidad.

**99.** Incluso se observa que, en el concepto de violación primero, en donde se plantearon argumentaciones de legalidad sobre la sentencia de origen, también se argumentó lo mismo, al afirmarse que por cuanto hace al Impuesto al Valor Agregado, la resolución de origen era contraria al principio de legalidad y seguridad jurídica, debido a que



sin sustento la autoridad excluyó del beneficio los recargos y multas, aun cuando resultaba procedente en términos del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.

- 100.** Para ello hizo valer que el beneficio de la reducción del 100% de las multas aplicaba solo sobre contribuciones propias, por lo que se dolió de que, sin motivos ni fundamentos, no fueron incluidos en el beneficio los recargos por prórroga del Impuesto al Valor Agregado, aun cuando en el tercer párrafo de la regla 2.14.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, prevé su procedencia.
- 101.** Argumentaciones que se encontraron encaminadas a sostener la inconstitucional del precepto impugnado basándose en cuestiones de legalidad, es decir, en lo relacionado con la aplicación de la norma y las razones que tuvo la autoridad fiscal para determinar no aplicarle el beneficio contenido en el precepto impugnado.
- 102.** Además, sus afirmaciones se centraron, por una parte, en los mismos puntos de la constitucionalidad, y por otra, en argumentos contradictorios entre sí, ya que, como se observa de lo tocante a la regla 2.14.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2022, en el primer concepto de violación sostiene que prevé la procedencia del beneficio reclamado y en el segundo concepto de violación dice que el contenido de la misma regla no es útil para enmendar irregularidades y justificar la decisión impugnada.
- 103.** No obstante las anteriores inconsistencias argumentativas, el Juez de Distrito hizo un esfuerzo por abarcar el mismo estudio desde las tres ópticas propuestas, la de impugnar la constitucionalidad de la norma



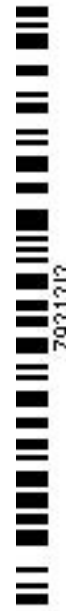
basándose en argumentos de legalidad y en materia de constitucionalidad bajo un estudio del principio de igualdad y de seguridad jurídica.

**104.** Es así como en el considerando séptimo el Juez de Distrito analizó la constitucionalidad del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, primero bajo el parámetro de igualdad y seguridad jurídica, como textualmente se indica en la página 27 (anverso y reverso) del fallo:

*“En su segundo concepto de violación, la quejosa aduce que el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, vulnera sus derechos humanos de igualdad y seguridad jurídica consagrados por los numerales 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, excluyen del beneficio contenido en el mismo, las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, como si se trataran de figuras análogas, cuando no son equiparables [...] El concepto de violación antes sintetizado es infundado.”*

**105.** Posteriormente el Juzgador Federal procedió a interpretar ampliamente la aplicación del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, desglosando el contenido de la norma, para después determinar que el beneficio era procedente tratándose de multas firmes o consentidas, que un acto administrativo conexo no fuera materia de impugnación y respecto de multas determinadas por el propio contribuyente.

**106.** En seguida, como ya se sintetizó, el Juzgador abundó sobre la naturaleza de los beneficios fiscales y su naturaleza, donde invocó algunos criterios de este Alto Tribunal, para concluir, entre otras



**AMPARO EN REVISIÓN 356/2024**

cuestiones, que al estar frente a un beneficio no se le privaba de derechos a la quejosa, sino que liberaba de una obligación adquirida.

- 107.**De igual forma el Juez de Distrito atendió que al tratarse de retenciones, el beneficio solo era procedente respecto del patrimonio propio, esto es, dinero cobrado al contribuyente y no de terceros, lo que también se desprendía del proceso legislativo.
- 108.**De todo lo anterior, se advierte que contrario a lo expresado por la revisionista se realizó un acucioso estudio de fondo de todas las cuestionas planteadas en su demanda de amparo, lo que no combate de manera alguna pues se limita a afirmar que no se analizaron las todas cuestiones y sólo abunda en manifestaciones previamente expuestas.
- 109.**Por otro lado, también se observa que, en relación con el principio de seguridad jurídica, la norma reclamada fue analizada por el Juzgador federal bajo los parámetros de los artículos 14 y 16 de la constitución, donde reitera el sentido de la conclusión previamente alcanzada respecto a que efectivamente no resultaba procedente la devolución, lo que no constituye un tema de constitucionalidad relativo a la norma impugnada al tratarse de temas relativos a la motivación de la autoridad para fundar su decisión, por lo que los argumentos con los que la revisionista pretende controvertir tal determinación y se limita a reiterar que el precepto impugnado es inconstitucional sin expresar mayores razones, es que se adviertan inoperantes.
- 110.**Sirve de apoyo a lo expresado con anterioridad la tesis de rubro:  
**"AGRAVIOS EN LA REVISION. NO BASTA REITERAR LOS**

02082024115705 sz/jsnUs2KBVx6Bwsq5oV2cPXZk= 0fbc4703f72d205d8726920fa8fd6c681055e80896d45c0be830598ca8f25481 7921212

**ARGUMENTOS DE LA DEMANDA, PARA CONSIDERARLOS COMO TALES.”<sup>10</sup>**

**111.** También resulta aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia de rubro: **“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA<sup>11</sup>”**.

**112.** Toda vez que no subsiste algún motivo de agravio pendiente de analizar y los argumentos propuestos por la revisionista fueron determinados inoperantes, lo conducente es que esta Primera Sala confirme la sentencia y niegue la protección constitucional.

**V. RESERVA DE JURISDICCIÓN**

**113.** Respecto de los argumentos hechos valer en el agravio segundo del escrito de revisión, toda vez que hace valer cuestiones de legalidad relativas al acto de aplicación también impugnado; debe reservarse su determinación a la competencia del Tribunal Colegiado del conocimiento, de conformidad con el Acuerdo General Plenario 1/2023.

<sup>10</sup> Texto: “No basta la simple manifestación, general e imprecisa, de reiterar los argumentos que se esgrimieron en la demanda, para considerarla como propia y verdadera expresión de agravios; sino que es necesario precisar cuáles son esos argumentos, qué consideraciones del juzgador no son congruentes con ellos, en qué consiste la falta cometida por el juzgador en la sentencia que recurre, cuáles son los preceptos aplicados indebidamente o qué otros dejó de aplicar, así como también qué conceptos de violación no fueron examinados por el a quo en la sentencia mencionada, y exponer los razonamientos que tienden a demostrar la falta de coincidencia que se alega.” Tesis aislada de Pleno visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 205-216, primera parte, página 14.

<sup>11</sup> Tesis 1a./J. 19/2012 (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, pág. 731 y registro digital 159947.



## AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

### VI. REVISIÓN ADHESIVA

**114.** Finalmente, como ha sido criterio reiterado en este Alto Tribunal, cuando los conceptos de violación resulten infundados o sean desestimados y lo que corresponda es negar la protección constitucional solicitada, desaparece la condición a que se sujeta el interés de las autoridades responsables adherentes por lo que la revisión adhesiva debe declararse sin materia.

**115.** Esto, porque conformidad con el artículo 82 de la Ley de Amparo<sup>12</sup>, la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes para expresar los agravios correspondientes y la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

**116.** Luego, derivado de que en el caso concreto lo que corresponde es negar el amparo a [REDACTED] parte quejosa y recurrente principal, ha quedado sin materia la revisión hecha valer por el recurrente adhesivo, **Presidente de la República**; toda vez que dicha determinación resulta acorde con la pretensión toral que lo motivó a hacer valer el medio de impugnación en comento.

**117.** Es aplicable al respecto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente por no contravenirla ni encontrarse superada, la jurisprudencia 1a./J. 71/2006 de rubro: **“REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AL**

<sup>12</sup>**Artículo 82.** La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL INTERÉS DEL ADHERENTE”<sup>13</sup>.

VII. DECISIÓN

118. De conformidad con todo lo razonado, en la materia competencia de esta Suprema Corte lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado a [REDACTED] en contra del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.

119. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

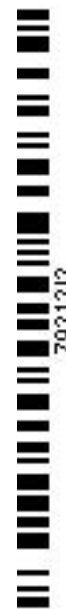
RESUELVE:

**PRIMERO.** En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

**SEGUNDO.** La justicia de la unión no ampara ni protege a [REDACTED] en contra del artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación.

**TERCERO.** Se reserva jurisdicción al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para los efectos precisados en esta resolución.

<sup>13</sup> Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, octubre de 2006, página 266, registro digital 174011.



7921212

AMPARO EN REVISIÓN 356/2024

**CUARTO.** Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de la República.

**Notifíquese;** con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

02082024115705 sz/jsnUs2KBVx6Bwsq5oV2cPXZk=0fbe4703f72d205d8726920fa8fd6c681055e80896d45c0be830598ca8f25481

